UN PAQUETE INMORAL

José Vicente Rangel

(Conferencia presentada en la III Semana Social Arquidiocesana de Mérida)

El título de esta conversación, sugerido por los organizadores del evento, es apropiado en primer lugar porque estamos viviendo un momento de incertidumbre generalizada. Nunca el país había estado más confundido, más preocupado y más alarmado que en los actuales momentos. Entre otras razones, porque estamos asistiendo al agotamiento de una serie de modelos políticos, económicos y sociales; porque hay una degradación institucional evidente; porque hay una perversión de las prácticas políticas. Todo ello le comunica al ciudadano una sensación de incertidumbre y de angustia. Hay confusión en los que gobiernan, hay confusión en la oposición, hay confusión en la gente que no participa.

Pero toda esta incertidumbre tiene una conexión con la realidad venezolana.

Hablamos de una realidad que nos demuestra que precisamente en el momento en que se cumplen 31 años de vigencia del sistema democrático, el país se encuentra más deteriorado que nunca en lo económico, más degradado que nunca en lo social, más pervertido que nunca en lo político y más afectado desde el punto de vista moral, que en etapas anteriores. Este balance aparentemente sombrío, pienso que no tiene nada que ver con lo que es la concepción de la democracia.

El venezolano sigue acariciando la idea de la democracia, pero empieza a comprender que una cosa es la democracia y otra son los demócratas; que una cosa es la doctrina y la teoría de la democracia, y otra distinta los encargados de hacerla realidad.

Sin embargo, en estos 31 años vemos el desarrollo de otros elementos en el seno mismo de la democracia. Hoy en día podemos hablar con toda propiedad, de la existencia de dos países. Uno es el país oficial, el de los cogollos, el de la partidocracia, el de las elecciones permanentes, el de los políticos vinculados a los grandes intereses económicos. El otro, un país silencioso, sumergido; el país cotidiano, el de los problemas diarios, que contrasta con el país sísmico, quinquenal y el liderazgo consagrado. La existencia de esas dos realidades, la oficial y la no oficial, la del político y la del ciudadano, la de las instituciones y la de la gente común y corriente, es lo que nos demuestra que tiene que darse un relanzamiento del proyecto democrático en el país.

En los datos sobre la realidad nacional, nos encontramos con las más perniciosas prácticas y con las aberraciones más siniestras. Por ejemplo, nos encontramos con un poder ejecutivo cuyo único rasgo democrático es la elección del presidente de la República cada cinco años. De resto, el ejercicio de 31 años de democracia ha sido incapaz de democratizar el poder en Venezuela. El poder en nuestro país sigue siendo tan anti-democrático como lo fue en el marco de las peores dictaduras. La única conexión que hay entre el jefe del Estado y la democracia, es el acto comicial. Todos los atributos del poder central en Venezuela, todo el comportamiento de nuestros jefes de Estado sigue siendo autoritario y con las mismas características que en las dictaduras anteriores. No hay una consulta al ciudadano, que no sea a través de algún tipo de elección. La consulta permanente que produzca el diálogo y que sea capaz de garantizar la democratización del poder, no se da en Venezuela.

Si vamos al poder judicial nos encontramos con las mayores perversiones. En Venezuela, desde el punto de vista teórico y formal existe un Estado de Derecho, pero en la práctica Venezuela es la negación del Estado de Derecho. En un país donde el Ministerio Público declaró hace aproximadamente cuatro años que existían 500 mil juicios paralizados, no se puede hablar de Estado de Derecho. Y en un país donde el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía General de la República se ha convertido en la antítesis de lo que es la legalidad democrática, tampoco se puede afirmar con propiedad la vigencia de un Estado de Derecho. La democracia es, en esencia, un Estado de Derecho; y la administración de la justicia tiene que ser el centro de la acción del Estado. En Venezuela no hay administración de justicia, sino denegación de la justicia. Esto comienza en el momento en que los partidos se reparten la designación de los jueces; en el momento en que la justicia que se imparte no es la que emana de la Constitución y de la Ley, sino del juez adeco o copeyano o independiente que está al servicio de determinados intereses. En Venezuela litigar es una aventura.

Para poder hacer acto de presencia en un tribunal, con ciertas posibilidades de encontrar justicia, se requiere disponer de abundantes recursos económicos. No hay justicia para los pobres en Venezuela, pues la justicia que se imparte es definitivamente una justicia de clases.

En relación con el Poder Legislativo en todas sus escalas, desde el Congreso hasta las legislaturas regionales, sabemos que en base al sistema electoral del país, el Congreso no ha sido otra cosa que un eco del Poder Ejecutivo. Por ello, un rasgo fundamental de la democracia que es el control, ha desaparecido en el sistema venezolano. La única garantía del ejercicio de la democracia en una nación, es el control, y es lo que lo diferencia de una dictadura. El control lo garantiza, entre otros, el Congreso de la República según establece la Constitución. Sin embargo, la simbiosis que se da entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo gracias a nuestro sistema de sufragio, ha degradado esa función principal de un sistema democrático verdadero.

A nivel de los concejos municipales, se sabe que han sido algo así como la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones. La perversión de la urbanización en Venezuela; la degradación del hábitat ciudadano; la distorsión de lo que es el régimen municipal tienen su origen en la inmensa corrupción que ha imperado en los concejos.

ILEGAL EL 70% DE LA DEUDA

Toda esta degradación institucional sólo es concebible en el marco de una situación de la que solemos hablar mucho, pero que no ha tenido respuesta: el proceso de corrupción en el país. Yo he sostenido en varias oportunidades que este proceso es progresivo, pues cada gobierno es más corrupto que el anterior. La corrupción de la democracia dejó en pañales a la corrupción de la dictadura, de la cual fui víctima al igual que muchos otros venezolanos. Pero las prácticas de corrupción en la democracia desbordaron las de la dictadura. Esto ha determinado que la única institución que funciona en Venezuela, es la institución de la corrupción, que ha pasado a ser el mecanismo fundamental de distribución de la riqueza, de distribución del excedente económico, de promoción social e, incluso, de funcionamiento institucional. Aquello que se busca a través de la Ley, no se encuentra en Venezuela. En cambio, lo que se busca por medio de la ilegalidad, se encuentra perfectamente.

Lo que hoy vivimos resulta inexplicable en una nación que ha manejado los recursos con que ha contado Venezuela. Ello tiene parcialmente su origen en un modelo equivocado que se aplicó en materia económica, en una equivocada concepción del papel de los sectores económicos de la sociedad, y de la vinculación de esos sectores de la clase política venezolana. Ese híbrido clase política-sectores económicos es un factor decisivo en el deterioro galopante del sistema. Si examinamos la situación que ha confrontado Venezuela en materia económica durante los últimos tiempos, percibimos no sólo el proceso de monopolización, sino también que ese factor de la corrupción que señalamos, ha sido determinante para las circunstancias que hoy en día afectan directamente a la colectividad.

Yo sostengo, por ejemplo, que en este proceso de endeudamiento que condujo al país a soportar la inmensa carga de una deuda de más de 30 mil millones de dólares, no sólo tiene que ver con la concepción aplicada al hacer los empréstitos para impulsar determinado tipo de desarrollo; sino que también tiene que ver con las prácticas de la corrupción. Se pudo determinar que el 70 por ciento de la deuda contraída por Venezuela era ilegal. Fue contraída violando expresas disposiciones de la legislación venezolana, y violando también leyes de los países de la banca de origen. Es decir, que un 70 por ciento de la deuda fue contraída en forma ilegal, entre otras razones, porque muchos de esos empréstitos que no necesitaba el país, fueron efectuados con la única finalidad de percibir las comisiones que por la contratación otorgaron los centros financieros y los bancos acreedores.

Cuando durante el gobierno de Jaime Lusinchi, criticamos a fondo el proceso de renegociación de la deuda, señalamos también que ese empeño del gobierno en pagar la deuda, que determinó que en cinco años se pagaran 25 mil millones de dólares; es decir, cinco mil millones menos de lo adeudado, quedando debiendo los mismos 30 mil millones, resultaba una acción suicida... No obstante, las autoridades se empeñaron en llevar adelante el refinanciamiento. ¿Cuál fue la razón que inspiró esa decisión? Yo estoy convencido de que hubo factores que tienen mucho que ver con la corrupción. Es más, en este momento se están haciendo investigaciones por canales muy serios, pues se ha podido detectar la existencia de gruesas cuentas bancarias con dólares en el extranjero, a nombre de personas que tuvieron que ver con este proceso de renegociación de la deuda. Fuimos al refinanciamiento carcomidos por la corrupción.

Cuando los venezolanos escuchamos al Presidente de la República anunciar el paquete de medidas, hicimos primero la reflexión en cuanto al sacrificio que se nos estaba pidiendo. Por el conocimiento de esas

medidas, teníamos que llegar a una primera conclusión: el sacrificio es para un sólo sector del país. La flotación del dólar, el incremento de las tasas de interés, el aumento de precios de los servicios y la liberación de precios no son sacrificios para los grupos económicos poderosos. Son sacrificios para las mayoías nacionales, para los sectores de menores recursos.

Esas medidas fueron anunciadas como algo verdaderamente novedoso. Sin embargo, para mí evelan simplemente una alta total de imaginasión, porque no son otra cosa que una vieja con-

cepción reeditada, de corte fiscalista, de simple manipulación cambiaria para obtener más dinero por la venta de los dólares que produce el petróleo, y de búsqueda de nuevos empréstitos. Como compensación, se disponen apenas 31 mil millones de bolívares para amortiguar el impacto social; y digo apenas porque esa cantidad no es nada junto al reconocimiento de las cartas de crédito, que son del orden de los 7.500 millones de dólares; es decir unos 200 mil millones de bolívares. En el otro platillo de la balanza nos encontramos con un aumento salarial que deja por fuera totalmente el problema del desempleo y el problema de los marginales.

EL PAQUETE INMORAL

El problema es que además de la crisis social y económica, el país sufre una tremenda crisis de carácter moral y ético. Y la crisis socio-económica se puede superar cuando los pueblos, sus dirigentes, sus instituciones cuentan con una firme concepción ética. Cuando no es así, los pueblos corren un riesgo tremendo inmenso. Ese es el verdadero problema venezolano, pues en el marco de la inmensa corrupción que domina al país resulta muy difícil dar respuestas a los desafíos que se nos plantean.

No ha habido clase dirigente más corrupta en Venezuela, que la actual. Los que están en el poder y por tanto tienen la capacidad para enfrentar la situación económica y social, no tienen autoridad moral para hacerlo; están degradados interiormente, estremecidos espiritualmente.

Estas medidas económicas yo las califico de inmorales. El aspecto económico de las mismas pueden ser objeto de debate, pero lo que más repulsa de ellas, es su carácter profundamente inmoral. No se puede colocar en un mismo nivel al que lo tiene todo y al que no tiene nada.

Nos hemos acostumbrado a que el árbol de la política, de los partidos y de los procesos electorales, nos impida ver el bosque de ciudadanos, de vecinos, de gente preocupada que ya no se deja alienar por los planteamientos de la partidocracia. Gente que empieza a vivir sus propios problemas, y no los creados artificalmente por los dirigentes políticos. Ese país que se está moviendo imperceptiblemente, que no tiene un registro electoral por ahora, que posiblemente se expresó en esos dos millones de compatriotas que se abstuvieron o votaron nulo, que no es

> de izquierda ni es de derecha. Es ese país de vecinos, obreros, cristianos de base, amas de casas, estudiantes... es un país por el cual vale la pena apostar.

En él está la respuesta, la salida, que no sé en qué forma se va a conformar. La incertidumbre que hoy vivimos es el primer paso para negarse a aceptar las cosas tal como las dice el Estado. Ese es el primer paso para convertirse en ciudadano. Algo ha comenzado, y es por esa razón que yo, que he dejado toda actividad partidista o electoral, que simplemente escribo y digo mis cosas, estoy esta noche aquí con ustedes.

